



# Medios privados venezolanos se debilitan bajo asedio de Chávez

*Un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas*



Comité para la Protección de los Periodistas

## En Venezuela, se transformó el panorama mediático

Durante más de una década en el poder, el Presidente Hugo Chávez Frías ha supervisado la transformación de casi todos los aspectos de la sociedad venezolana, incluyendo los medios de comunicación. Cuando Chávez asumió por primera vez la presidencia en 1999, contó con el apoyo de los medios privados establecidos. Pero la relación pronto se deterioró y en abril de 2002 fue derrocado por un breve período en un golpe de estado que el presidente alega haberse llevado a cabo con el respaldo de algunos conocidos propietarios de medios. En la actualidad, muchos de los medios más críticos ya no están más o se han llamado al silencio, y una vasta presencia de medios del estado se hace eco de las posiciones del gobierno.

**Por Joel Simon**



Hugo Chávez en un acto de campaña en Maracay, Venezuela, el 1 de julio. (AP / Ariana Cubillos)

La altamente polarizada campaña presidencial, que ingresa en su fase final, enfrenta a Chávez con el ex gobernador Henrique Capriles Radonski. La polarización se refleja de forma dramática en la prensa, con los medios privados en respaldo de Capriles y aquellos en manos del estado montando un apoyo fervoroso a favor de Chávez. La cacofonía ahoga la posibilidad de debatir temas importantes y en el contexto de la campaña electoral el público es el gran perdedor. A través de su presencia masiva en los medios del estado y el uso de métodos de censura, acoso legal y sanciones administrativas, el gobierno de Chávez fija límites claros sobre el disenso público, como revela este informe.

Este es el cuarto informe especial sobre Venezuela desde Chávez asumió el poder. Al leerlos en secuencia se puede tener una idea acabada de lo dramático que ha sido el deterioro de los medios en este período. El

primer informe, "Radio Chávez", publicado en febrero de 2001, describió a un vibrante panorama mediático en el que el presidente, con creciente frecuencia, utilizaba la radio y la televisión para difundir largas diatribas acerca de temas tales como "el placer de tener una novia y el proceso revolucionario en las universidades". El informe concluía poniendo énfasis en una preocupación: "Si es cierto aquello de que toda revolución devora a sus hijos, los periodistas venezolanos deben rezar para que Chávez no se vuelva demasiado hambriento".

El segundo informe, titulado "Carne de Cañón" y publicado luego del fallido intento de golpe de estado en 2002, describió una larga serie de ataques físicos donde los periodistas "atrapados entre la incendiaria retórica del presidente venezolano Hugo Chávez Frías y el activo papel político que los propietarios y directores de los medios han adoptado-- se han convertido en blanco de ataques de sectores populares".

El tercer informe del CPJ publicado en 2007 y titulado "Estática en Venezuela", describió en detalle la decisión del gobierno de no renovar la concesión del canal crítico RCTV y demostró como la embestida cada vez más profunda contra los medios estaba provocando mayor autocensura. En los años posteriores a la publicación del informe, RCTV ha sido silenciado junto a decenas de otros medios audiovisuales críticos, periodistas fueron encarcelados supuestamente por haber difamado a funcionarios y los organismos de regulación junto a una justicia íntimamente ligada al ejecutivo han impuesto censura en la cobertura de temas sensibles.

La declinación del periodismo venezolano tiene importantes implicancias no sólo para el país pero también en toda América Latina. Casi todas las estrategias de Chávez para controlar y aislar a los periodistas críticos han sido emuladas por gobiernos que simpatizan con el venezolano en la región, desde Nicaragua a Ecuador. En la actualidad, Venezuela es parte de un bloque de países dentro de la Organización de los Estados Americanos que buscan desmantelar su sistema de protección y promoción de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría especial para la libertad de expresión.

En la década del ochenta, a medida que América Latina restauraba sus democracias luego de una década de dictaduras brutales, la política electoral se convirtió en norma en la región. El propio Chávez ganó en las urnas con total legitimidad y asumió con el respaldo generalizado de la sociedad venezolana. Pero ha utilizado su tiempo en la presidencia para socavar antes que desarrollar las instituciones de la democracia participativa.

Mientras Chávez lucha contra el cáncer, tiene que hacer frente a su legado. A medida que se concentra en consolidar la Revolución Bolivariana, el fracaso de Chávez para apoyar y defender a las instituciones independientes, incluyendo a los medios, puede minar la legitimidad de las próximas elecciones presidenciales. No importa quién gane en los comicios, retroceder en el tiempo luego de una década de represión contra los medios y promover un clima más abierto y tolerante será uno de los desafíos claves para el próximo gobierno.

*Joel Simon es el director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas. Ha escrito numerosos artículos sobre temas de medios, colaborando para Slate, Columbia Journalism Review, The New York Review of Books, World Policy Journal, Asahi Shimbun y The Times of India. Ha liderado numerosas misiones internacionales sobre libertad de prensa.*

## Medios privados venezolanos se debilitan bajo asedio de Chávez

El gobierno de Chávez ha utilizado una variedad de leyes, amenazas y medidas regulatorias para debilitar, de manera gradual, a la prensa independiente mientras erigía un imperio mediático estatal, provocando un cambio profundo del anterior panorama de medios. Un resultado: Temas cruciales no están recibiendo cobertura informativa en un año electoral. **Un informe especial del CPJ por Monica Campbell**



Hugo Chávez en una conferencia de prensa en diciembre de 2011.  
(AP / Ariana Cubillos)

*Publicado el 29 de agosto de 2012*

### CARACAS

Parecía una noticia de rutina. En marzo, José Gregorio Briceño, gobernador del estado sureño de Monagas, se presentó en la televisión nacional y protestó la falta de respuestas de funcionarios del gobierno frente a reclamos de agua contaminada en el estado. Un oleoducto administrado por la compañía estatal de petróleo, PDVSA, había estallado en el río Guarapiche, que atraviesa el estado de Monagas. Luego, la prensa publicó testimonios de expertos independientes y familiares con niños enfermos.

El presidente venezolano Hugo Chávez Frías prometió tomar medidas, pero en lugar de investigar la posibilidad de que el agua estuviera contaminada se propuso refutar al “terrorismo mediático” que según él amenaza al país. Funcionarios del gobierno central se quejaron de una supuesta manipulación política y de una conspiración de los medios en el año electoral. Chávez es candidato y aspira a un tercer mandato de seis años en octubre. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz solicitó a un tribunal de control una medida cautelar

para exigir a los medios de comunicación que la labor informativa sobre el tema sea respaldada con informes técnicos de una entidad competente. De otro modo, los periodistas podrían generar zozobra y “desestabilizar” el orden público e incurrirían en multas o penas de prisión.

¿“Qué ocurre entonces si una mujer sale de su casa con un vaso de agua color marrón o un niño con diarrea? No podemos difundirlo. ¿Y qué pasa si la comunidad protesta por el agua sucia? ¿Tampoco podemos difundirlo?” se pregunta Silvia Alegrett, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Alegrett y otros periodistas venezolanos indicaron que mientras el gobierno cita estudios sobre la calidad del agua, obtener copias de dichos informes resulta complicado. “Los funcionarios aparecerán al aire con los estudios y dirán: ‘Lo que dice la prensa no es verdad’. Pero luego no veremos copias de esos informes”, afirmó Alegrett.

La medida cautelar vinculada al agua contaminada representa uno de los tantos episodios dentro de un campo minado de reformas legislativas y decretos presidenciales introducidos por el gobierno de Chávez desde que asumió el poder en 1999 para restringir a los medios independientes. Para evitar posibles multas o incluso penas de cárcel, muchos periodistas y medios han decidido censurar su propia cobertura informativa.

El gobierno también ha bloqueado cobertura informativa crítica, ha cerrado radios y canales de televisión, ha demandado a periodistas por difamación, ha excluido a quien considera hostil de eventos oficiales y ha acosado -con la ayuda de militantes y medios estatales - a periodistas críticos. El resultado es que temas de interés nacional, incluyendo la salud de Chávez, el creciente desempleo, la superpoblación en las prisiones y las condiciones del vital sector energético estatal, no están recibiendo una cobertura profunda y los temas no pueden ser investigados en un período crucial para el país. Chávez está lidiando no sólo contra el cáncer sino por la primera vez en la historia de sus campañas presidenciales tiene un contendiente fuerte, el gobernador Henrique Capriles Radonski del estado de Miranda.



Henrique Capriles plantea un desafío sin precedentes a Chávez.  
(AP/Ariana Cubillos)

El gradual desmantelamiento de la prensa más crítica de Venezuela y la creación de un vasto conglomerado de medios estatales representan un cambio extraordinario del panorama de medios. Antes de asumir Chávez, los principales diarios y las estaciones de radio y televisión, eran dominados por el sector privado, una elite empresarial determinada a resguardar a su público de puntos de vista de izquierda y socialistas. Cuando los críticos acusan a Chávez de acaparar poder mediático, sus partidarios argumentan que el gobierno ha democratizado efectivamente a la prensa tras arrancarle el control de una poderosa oligarquía con agenda propia.

La polarización resultante está reflejada en la cobertura informativa de cara a las elecciones presidenciales. En febrero, Venezuela llevó a cabo una primaria presidencial que originó una asistencia masiva e inesperada y proporcionó un importante triunfo para Capriles como el candidato de la coalición opositora, si bien Chávez aún lidera la mayoría de las encuestas. Pero las encuestas que favorecen a cualquiera de los candidatos son cuestionadas, mientras que la responsabilidad por los hechos de violencia en actos de campaña con frecuencia se atribuye a partidarios infiltrados por el bando rival.

Así como buena parte de la prensa privada se enfoca en Capriles, el extenso aparato gubernamental de canales de televisión, radio y prensa escrita produce cobertura negativa sobre Capriles o, en el mejor de los casos, información superficial sobre su campaña. Mientras tanto, cobertura exhaustiva y con matices sobre la campaña de Chávez y las propuestas de su partido están mayormente ausentes en la prensa privada. Una mirada equilibrada y perspicaz sobre cualquier de los candidatos es difícil de encontrar.

“A medida que Chávez ha transformado su poder presidencial en un elemento más permanente, hemos evidenciado mucho mayor falta de respeto por las reglas del juego”, afirmó Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, una organización local de libertad de expresión.

## **Amenazas legales y regulatorias que intimidan**

La aprobación de leyes que otorgaron a Chávez mayor control sobre los medios le está dando buenos resultados al gobierno. En 2004, la Asamblea Nacional con el apoyo mayoritario de legisladores chavistas aprobó la ley de responsabilidad en radio y televisión que prohíbe antes de las 11 p.m. contenidos que puedan ser considerados demasiados violentos o sexuales para niños o que “promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público”. En diciembre de 2010, diputados del Partido Socialista Unido de Chávez extendieron estas disposiciones a Internet. Funcionarios del gobierno pueden desde entonces ordenar a proveedores de servicio de Internet que limiten los sitios Web que violen los controles.



El 27 de junio de 2009, algunos manifestantes, a la izquierda, marcharon en apoyo de los reguladores que están investigando a Globovisión, mientras que otros, a la derecha, se manifestaron en apoyo de la emisora.

Los periodistas criticaron la legislación y la calificaron de imprecisa, al destacar que puede aplicarse a temas que se extienden desde enfermedades transmitidas sexualmente a la escalada de violencia en las calles de

Venezuela. Mientras que estas leyes aún no han sido utilizadas para encarcelar a periodistas, la amenaza de procesamiento y multas son suficientes para hacer que la mayoría vacile en desafiar la tolerancia del gobierno, según expresaron los periodistas locales.

En 2010, la Asamblea Nacional le otorgó a Chávez el poder y las atribuciones para gobernar por decreto con el pretexto de ayudar a las víctimas de inundaciones, pero la jugada se produjo apenas unas semanas antes de la asunción en la Asamblea Nacional de un nuevo grupo de políticos opositores, impidiendo así cualquier plan para limitar los poderes de Chávez.

Un reportero de un diario en la ciudad costera de Maracay señaló al CPJ que sus editores han prestado mucha atención al asedio contra el canal privado de televisión Globovisión y al cierre de RCTV en 2007, una emisora popular y crítica de Chávez. Las decisiones en el periódico se adoptan en consecuencia. “La mayoría de los medios en Maracay prefieren publicar lo que dicen las fuentes oficiales”, y eso es desmoralizante para los reporteros locales, afirmó el periodista, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias de sus editores. Por ejemplo, los diarios locales destacaron la declaración de un funcionario revelando que una carretera a la costa Atlántica sería arreglada a tiempo para las próximas vacaciones. Fotos independientes mostraron un puente colapsado, pero los editores se negaron a publicarlas o a informar sobre el lamentable estado de la autopista. “Uno deja de pelear”. Un editor de uno de los cuatro diarios de Maracay refutó que “Esa presión [de ser suaves con el gobierno] no existe” y agregó que cualquier falta de profundidad en la cobertura periodística es cuestión de tiempo y de recursos.

“La amenaza de juicios e insultos está funcionando”, advirtió Miguel Henrique Otero, editor del diario *El Nacional* de Caracas.

Los obstáculos regulatorios también juegan un papel importante. En 2009, el organismo regulador del espectro radioeléctrico, Conatel, cuyos integrantes pueden ser designados o destituidos por Chávez, clausuró e incautó equipamiento de más de 30 radios, con motivos que se extienden desde tecnicismos administrativos a emisiones sobre ocupantes ilegales en tiempos de déficit de viviendas. Funcionarios anunciaron que más emisoras figuraban en la lista, pero no especificaron cuáles. “El mensajero es castigado sin importar siquiera si la información es verdadera”, sostuvo Andrés Cañizalez, profesor y especialista en medios de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. “Es difícil de probar en ocasiones. Un presentador de radio está de repente fuera del aire, o una emisora cierra, y uno luego se entera que el gobierno ha retirado sus anuncios”.

Mientras tanto, se ha vuelto cada vez más difícil acceder a información de interés público. La lista de reporteros a quienes se les permite ingresar a conferencias de prensa oficiales se está reduciendo. Los periodistas de Globovisión, que es el único canal de televisión crítico que queda en el país, están a menudo excluidos. “Si uno no figura en la lista de medios aprobados, y Globovisión definitivamente no está en esa lista, entonces deberá quedarse parado en un pasillo”, aseguró Lysber Ramos Sol, quien lidera la unidad de investigación de Globovisión. Añadió que sus periodistas únicamente se enteran de eventos oficiales a través de colegas de otros medios.

Una queja a menudo repetida por periodistas independientes es que cuando se les permite atender a conferencias de prensa, los funcionarios del gobierno los ridiculizan. Amira Muci, conductora de un programa de opinión en Radio Victoria de Maracay y la secretaria general de la filial local del Colegio Nacional de Periodistas, señaló que el trato irrespetuoso es la norma. “Cuando las preguntas son incómodas o cuando no tienen respuestas, intentan avergonzar al periodista”, reconoció Muci. “O dicen que está perturbando el

proceso revolucionario. Son muchos los periodistas que ceden y se convierten, en efecto, en empleados del gobierno. Piensan que es la única forma de sobrevivir”.

Julio Rafael Chávez Meléndez, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, refutó la declaración de la reportera y aseveró: ¿“Por qué debe tolerar el gobierno a los mal llamados periodistas que no son otra cosa que agentes de la oposición, no tienen la verdadera intención de informar al público y están sesgados a cumplir con sus propias agendas? ¿Por qué debería el Presidente Chávez aguantar el intento constante por ridiculizarlo? ¿No tenemos derecho como gobierno responsable a poner freno a la cobertura informativa irresponsable que busca hundir a Venezuela”?

En febrero, se fijaron límites para el acceso de periodistas al recinto de la Asamblea Nacional durante los debates. Si bien antes se permitía seguir las sesiones desde el balcón de la asamblea, desde febrero los reporteros deben darle seguimiento desde monitores de televisión en los pasillos de afuera. El audio en vivo de esta transmisión suele silenciarse de repente, con una explicación en la pantalla en el sentido de que se trata de una sesión privada.

## **Violencia y crimen son temas delicados**

El crimen es un tema especialmente sensible. Encuestas recientes han revelado que más del 80 por ciento de todos los venezolanos señalan al crimen como su principal preocupación. Sin embargo, funcionarios de las fuerzas de seguridad son muy lentos para publicar las estadísticas sobre homicidios, con las cifras más recientes de 2010. El titular de la fuerza policial de Venezuela recientemente indicó a los medios estatales que el índice de criminalidad había bajado en 2012, pero no proporcionó números específicos sobre asesinatos y en cambio aportó la cantidad de arrestos en casos de asesinatos. Con frecuencia, los periodistas publican sus propios datos basados en informes de la policía o compilaciones de grupos no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Violencia, que sostiene que se registran al año cerca de 60 asesinatos por cada 100 mil habitantes, uno de los más elevados del mundo.

La reportera del diario en Maracay afirmó que las estadísticas sobre crimen que recibían un tratamiento importante en el periódico ahora son minimizadas y la mayoría de las noticias referidas al tema son publicadas en la sección comunitaria, donde los residentes locales escriben para denunciar sus problemas.

Los periodistas también han sido obstaculizados por decisiones de la justicia para limitar la publicación de fotos mostrando muerte o violencia. En agosto de 2010, el diario *El Nacional* publicó una foto en su portada en la que se mostraba a la abrumada morgue de Caracas, con cadáveres desnudos apilados en las mesas y en el suelo. Un tribunal dictó una orden judicial temporaria que prohibió al diario publicar imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de “sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas” que puedan alterar el bienestar psicológico de niños y adolescentes. En respuesta *El Nacional* publicó la palabra “Censurado” en un espacio en blanco en su portada. En una muestra de solidaridad, el diario *Tal Cual* volvió a publicar la fotografía y fue objeto del mismo mecanismo de censura por parte del tribunal. Las medidas sobre ambos diarios fueron levantadas desde entonces.





Teodoro Petkoff (AP/Ricardo Moraes)

Teodoro Petkoff, director de *Tal Cual*, ex guerrillero comunista y luego ministro de gobierno, señaló que el incidente fue otro intento del gobierno por controlar a los medios. “No somos sensacionalistas”, afirmó Petkoff. “Publicamos lo que vemos como importante, y en este momento en Venezuela, tenemos un serio problema con el aumento del crimen”.

Otero, de *El Nacional*, quien reconoce que la amenaza de juicios es una cuestión permanente en su periódico, insiste que si bien él no practica la autocensura, sus reporteros necesitan ser cuidadosos con las nuevas restricciones sobre el tema del agua contaminada.

En Globovisión, los reporteros ahora usan términos como “no apropiada para tomar” en lugar de “contaminada”. “Decimos lo mismo con otras palabras. Obviamente esto constituye un cierto grado de autocensura”, admitió Ricardo Antela, el asesor jurídico del canal de televisión.

Correa de Espacio Público no espera que haya avances sobre el tema. Cuando la ONG que dirige presentó una solicitud para ver los resultados de las pruebas de la calidad del agua en Caracas el año pasado, el ministro de medio ambiente respondió de manera cortante y dijo que el agua en la capital “es potable de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud”. Una evaluación del sitio web del ministerio de medio ambiente, donde los reporteros son dirigidos para buscar información, muestra datos únicamente hasta 2009. La falta de información hace que los medios dependan mucho de expertos y también de la especulación. Como resultado, la credibilidad de los periodistas está en tela de juicio. “No se puede creer lo que dicen los medios del estado porque es posible que no estén contando toda la verdad”, destacó Elides Rojas, editor del diario *El Universal*. “Pero entonces tampoco se puede creer a los medios privados porque sus puntos de vista pueden estar sesgados también. Al final, nadie está completamente informado”.

## **Lazos con Chávez, más que leyes, ofrecen protección**

Eleazar Díaz Rangel, director de *Últimas Noticias*, el diario de mayor circulación en Venezuela está en franco desacuerdo con las quejas por la falta de libertad de prensa. “Yo siempre le pido a la gente que me muestre qué es lo que no se puede publicar en Venezuela, y nunca encuentro ejemplos”, afirmó. “Sólo hay que mirar mi diario”, indicó mientras hojeaba una reciente edición de *Últimas Noticias*, que tenía un artículo de un acto de campaña del candidato de la oposición Capriles, información sobre protestas docentes por la falta de pago

de salarios atrasados y actualizaciones sobre el tratamiento de cáncer de Chávez. Una columna de opinión de un profesor local abogaba por el fin del gobierno de Chávez.

Aún así *Últimas Noticias* también tiene abundante publicidad oficial, un ingreso que otros diarios como *El Universal* y *El Nacional* perdieron hace ya tiempo. La relación cercana y de larga data entre Díaz Rangel y Chávez sirve para explicar la posición cómoda del diario. Díaz Rangel ha escrito libros sobre Chávez que fueron publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Está considerado como una suerte de defensor público sobre posiciones que son respaldadas por Chávez. Los críticos sostienen que Díaz Rangel es parte de una elite favorable al gobierno e instalada en los medios, a cuyos integrantes se les permite proyección a cambio de un cierto nivel de crítica y luego son presentados como ejemplos de libertad de prensa.

Otro integrante de este grupo es Mario Silva, conductor del programa “La Hojilla”, que se emite por las noches en el canal de televisión estatal. El programa consiste básicamente en el conductor sentado en su escritorio con una serie de recortes periodísticos de diarios como *El Nacional* (al que Silva denomina “El Nazional”). La cámara toma de cerca los nombres de artículos firmados en la prensa y las fotos de columnistas críticos aparecen marcadas con resaltador. En uno de sus programas, Silva tenía un artículo que incluía críticas al programa gubernamental de viviendas para gente de bajos ingresos y preguntó: ¿Por qué estos periodistas tienen tan tremendo odio por nuestro país”? Durante los monólogos de Silva, inmensas fotografías de Fidel Castro y Che Guevara, los héroes de la revolución chavista, son proyectadas en el fondo del decorado.

“Las reglas son claras”, aseguró Alegrett del Colegio Nacional de Periodistas. “Están los intocables y el resto de nosotros”. Para los periodistas que están dispuestos a desafiar fallos e investigaciones en los tribunales, la confianza en la posibilidad de un juicio justo es demasiado baja. Chávez ha designado a la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes a su turno tienen creciente influencia sobre las designaciones de jueces de nivel inferior. En un caso donde los relatores especiales de las Naciones Unidas afirmaron que se violó la independencia judicial, María Lourdes Afiuni Mora, una jueza de Caracas, fue arrestada en 2009 minutos después de haber permitido la liberación bajo fianza de un empresario y opositor a Chávez cuya detención ella consideró arbitraria. Al día siguiente, Chávez apareció en la televisión estatal y reclamó “dureza” con Afiuni. En cuestión de días, fue acusada de delitos que incluyeron corrupción y abuso de autoridad. La jueza fue encarcelada por más de un año a la espera del juicio, y permanece bajo arresto domiciliario.

El caso Afiuni sirvió como advertencia a los periodistas que esperan que la justicia pueda respetar sus derechos a la libertad de prensa, sostuvo Carlos Ayala Corao, un abogado constitucionalista y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No pueden permitir que una jueza fundamente sus decisiones en los hechos, y la jueza debe considerar cómo evaluará sus fallos la presidencia. Decidir de la manera equivocada, ya no sólo implica arriesgar la destitución, sino la cárcel”.

Algunos periodistas han decidido elevar sus preocupaciones a nivel internacional. En marzo, un grupo de periodistas y organizaciones de libertad de prensa, incluyendo Espacio Público, describieron en detalle la utilización del sistema judicial para limitar la libertad de prensa por parte del gobierno de Chávez durante una audiencia en Washington ante la CIDH, el organismo de monitoreo y promoción de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos. La audiencia coincidió con la difusión del informe anual de la CIDH, que puso de relieve acusaciones sobre abusos a los derechos humanos en Venezuela. Luego de la visita, el periódico gubernamental *Correo del Orinoco*, publicó un artículo citando únicamente a Guillermo Saltrón, el representante de Venezuela ante la CIDH, que acusó a las organizaciones no gubernamentales de prepararse



Julio Chávez en su oficina.  
(Monica Campbell)

para “justificar cualquier invasión o acto de violencia para prevenir que el presidente continúe gobernando” después de las elecciones de octubre. En julio, Chávez anunció planes para desligar a Venezuela de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alegando que los organismos están degradados.

Mientras tanto, Julio Chávez, quien impulsó la ley habilitante de 2010 para permitir que el presidente pueda gobernar por decreto, continuará promoviendo legislación favorable al gobierno. Recientemente obtuvo financiamiento para una nueva cadena de radios comunitarias, “alternativas y unidas”, controladas por el estado que, espera, pueda convertirse en una fuente informativa líder. Nuevos periodistas recibirán entrenamiento en escuelas estatales y serán obligados a presentar “información precisa”.

“Creo en la libertad de expresión, pero ello no significa que no pueda existir supervisión sobre la información. Durante años, el sector privado tuvo el monopolio de nuestros medios y estoy feliz de ver que eso finalmente ha cambiado”, subrayó Julio Chávez.

El cambio, sin embargo, ha estado empujando el péndulo de un extremo partidario a otro, advierten los críticos. “El gobierno está convirtiéndose en un experto en propaganda”, expresó Rojas, director de *El Universal*. “Es muy bueno para controlar el mensaje”.

Durante un año electoral, esto representa una ausencia de información valiosa en los medios audiovisuales y en los diarios, una situación que deja a los votantes mal informados. Pero es probable que el mapa de medios en Venezuela forme parte del legado de Hugo Chávez aún mucho tiempo después de la elección presidencial.

*Monica Campbell es una periodista independiente radicada en San Francisco y ex consultora del CPJ.*

## Recomendaciones del CPJ a las autoridades venezolanas

- Garantizar la independencia del ente regulador de los medios audiovisuales y asegurar que no sea objeto de presiones o interferencia indebida del poder ejecutivo.
- Requerir al ente regulador que publique el proceso y el criterio para el otorgamiento, la renovación y la revocación de las concesiones del espectro radioeléctrico. Proporcionarles a los medios audiovisuales la oportunidad de presentar la renovación de sus concesiones en un proceso justo, transparente y en un espacio neutral.
- Eliminar requerimientos legales que obligan a los medios privados a transmitir los discursos presidenciales y los comunicados oficiales.
- Eliminar en la Asamblea Nacional las disposiciones sobre difamación y el desacato del código penal, conforme a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
- Modificar en la Asamblea Nacional la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para que su lenguaje amplio e impreciso no pueda ser utilizado para castigar o intimidar a los medios audiovisuales o digitales con acusaciones de incitación al odio o la violencia, de fomentar la zozobra en la ciudadanía, de incitar a la desobediencia o desconocer a las autoridades.
- Asegurar que los venezolanos puedan permanecer informados al garantizar igual acceso a todos los periodistas y medios de comunicación a eventos, edificios, instituciones y fuentes del gobierno.
- Asegurar que los medios del estado no sean manipulados o utilizados para lanzar ataques personales dirigidos a desacreditar a periodistas y medios críticos.

## Globovisión asediada por investigaciones, multas y violencia

La reciente investigación del ente regulador sobre la cobertura de Globovisión, el único canal de televisión que critica al gobierno de Chávez, es el último de una serie de procedimientos y otro tipo de actos intimidatorios. La emisora está luchando por seguir al aire. **Por Monica Campbell**



Publicidades de Globovisión en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)

*Publicado el 29 de agosto de 2012*

### CARACAS

En Venezuela, existe una sola cadena televisiva crítica del gobierno que aún se mantiene al aire, pero sólo apenas. El canal privado, Globovisión, está haciendo frente a multas por parte del ente regulador, una oleada incesante de menosprecio por parte del gobierno e incluso violencia directa contra su personal. Está siendo obligado a defenderse en la justicia y aún debe producir cobertura de noticias durante un año electoral que es crucial para el país.

Nadie espera que las cosas sean fáciles para Globovisión en un país dominado por los medios del estado y donde las concesiones de varios medios audiovisuales críticos han sido revocadas durante el mandato del Presidente Hugo Chávez. Pero el último año trajo aparejado desafíos sin precedentes. En octubre de 2011, tras un violento motín en la prisión El Rodeo, en las afueras de Caracas, Conatel, el organismo que regula el espectro radioeléctrico, le impuso a Globovisión una multa 9,3 millones de bolívares (2,16 millones de dólares) por su cobertura sobre la crisis.

Si bien otros medios venezolanos e internacionales cubrieron los disturbios, entrevistando a testigos y familiares preocupados por la situación, el ente regulador eligió a Globovisión, y reclamó que había transmitido demasiadas secuencias de familiares llorando que fueron empalmadas con el sonido de disparos. El canal, según concluyó el ente regulador, promovió un clima de “odio e intolerancia”. Globovisión respondió que había informado sobre el tema en forma completa, dialogando con familiares de los involucrados y trabajando con las limitaciones impuestas a la prensa, que incluyeron mantener a los periodistas retirados a casi un kilómetro de la cárcel.

La multa es el último añadido del expediente del gobierno sobre Globovisión. Chávez había acusado previamente a la emisora de apoyar en 2002 el fallido golpe de estado en su contra. En ese caso, Globovisión encontró el mismo escrutinio oficial que otros canales privados, incluyendo Radio Caracas Televisión, o RCTV, cuya concesión no fue renovada en 2007. En 2010, RCTV salió también de la grilla del cable y el satélite luego de rehusarse a transmitir los mensajes del Presidente Chávez.

Conatel también investigó a Globovisión en 2009, luego de que la emisora informara sobre un terremoto que ocurrió en Venezuela antes de que los funcionarios hubieran difundido un comunicado público sobre el sismo. El ente regulador reclamó porque la emisora había contado con información proporcionada por las autoridades sismológicas estadounidenses en lugar de funcionarios venezolanos, y que pudo haber provocado pánico y desorden público. El director de Globovisión argumentó que las autoridades nacionales reaccionaron con lentitud frente al terremoto y que información confiable fue proporcionada por otras fuentes.

Entre los numerosos procedimientos administrativos abiertos contra Globovisión, el ente regulador ha acusado a la televisora de “incitar a la rebelión” y crear “pánico y zozobra en la población”, según la investigación del CPJ. Una sanción en cualquier caso podría ocasionar la suspensión de la emisora por un período de hasta 72 horas; una segunda sanción resultaría en la revocación de su licencia.



Guillermo Zuloaga sale del Palacio de Justicia en Caracas el 17 de julio de 2009. (AP/Ariana Cubillos)

En 2010, Guillermo Zuloaga, el presidente de Globovisión, abandonó el país para escapar de una serie de acusaciones, incluyendo la difusión de noticias falsas, ofender a Chávez en declaraciones públicas, además de cargos por supuesta usura y agavillamiento en relación con un negocio de venta de automóviles del empresario. Zuloaga negó las acusaciones e indicó que habían sido fabricadas en un intento por cerrar la emisora. El empresario permanece en el exilio en Estados Unidos. “Somos la última emisora independiente que queda en pie y el gobierno está haciendo lo que puede para intentar cerrarnos”, aseveró María Fernanda

Flores, la vicepresidenta de Globovisión, en una entrevista en la sede del canal, en Caracas.

El gobierno sostiene que Globovisión tiene una historia plagada de sensacionalismo y manipulación. “Es un perjuicio público”, aseguró Julio Rafael Chávez Meléndez, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. “Aun así, se les permite emitir sus notas, que claramente justifican el objetivo político de la oposición. Pero tampoco podemos permitir que pisotee nuestras leyes sin consecuencias. Si bien pueden defender su derecho a existir como un canal de noticias, nosotros debemos defender nuestro derecho a aplicar la ley. Esto no es un intento de silenciar a la oposición”.

Carlos Ayala, un experto en derecho constitucional en Caracas y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en desacuerdo. Aseguró que la audiencia de Globovisión puede quedarse con la impresión de que los medios venezolanos son libres de criticar al gobierno venezolano, pero el canal está pagando un alto costo por expresar sus puntos de vista. “Estamos viendo cuán lejos puede llegar el gobierno, amenazando la propia existencia de un canal de televisión al imponer enormes multas”. La multa de 2,16 millones de dólares estadounidenses por la cobertura de Globovisión sobre la crisis carcelaria es equivalente al 7,5 por ciento de los ingresos brutos de 2010.

Aún así, algunos críticos reconocen que la emisora exagera la polarización de la prensa y es culpable de una cobertura sesgada como sus colegas pro-Chávez en medios oficiales. Si bien es comprensivo con la posición en soledad de Globovisión, Andrés Cañizález, profesor y experto en medios de la Universidad Católica Andrés Bello, admitió que la emisora invierte “menos tiempo en periodismo investigativo y más recursos en señalar los errores que comete el gobierno”.



Periodistas en los estudios de Globovisión. (AP/Ariana Cubillos)

Lysber Ramos Sol, quien lidera la unidad de investigación de Globovisión, afirmó que las investigaciones periodísticas y objetivas son parte de los ideales del canal, pero añadió que los reportajes contundentes son “casi imposibles” de realizar dada la falta de transparencia que existe en Venezuela. Los reporteros de Globovisión también alegan que forman parte de una lista negra. Con mucha frecuencia, afirman ellos, funcionarios les niegan pedidos de información y entrevistas con el gobierno. El ingreso a las conferencias de prensa oficiales es bloqueado como rutina.

“Lo típico es llegar a una conferencia de prensa y ser detenido en la puerta de entrada por no estar en la lista de periodistas autorizados”, afirmó Sasha Ackerman, que se unió al equipo de reporteros de Globovisión hace

tres años. “Entonces esperamos afuera con el resto de los periodistas excluidos y obtenemos información de otros colegas o la rebuscamos por otro lado”.

Los periodistas de Globovisión también enfrentan amenazas físicas e intimidación. En marzo, un grupo de sujetos armados no identificados, vistiendo chaquetas rojas del Partido Socialista Unido pro-Chávez, atacaron a Ackerman y a un camarógrafo de la emisora y robaron material mientras cubrían una concentración del candidato presidencial de la oposición Henrique Capriles Radonski. La noche del ataque, el esposo de Ackerman le preguntaba si informar sobre las elecciones presidenciales este año le pondría en peligro. “Lo pensé mucho”, indicó Ackerman. “Fue la primera vez que había enfrentado violencia directa por reportear. Pero al mismo tiempo me he vuelto más determinada para salir e informar”.

Mientras tanto, integrantes enmascarados del grupo pro-gubernamental “La Piedrita” se reunieron en marzo afuera de las oficinas de Globovisión para lanzar insultos y agitar armas, según informó el canal. En años anteriores, el grupo se atribuyó la responsabilidad de atacar a periodistas y medios con gases lacrimógenos y amenazó con “tomar las armas” contra Globovisión, mientras acusaba a la emisora de promover la violencia contra Chávez.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno que proporcionara protección al canal y a sus periodistas, pero el gobierno nunca implementó las recomendaciones del tribunal. El gobierno venezolano, junto con su par de Ecuador, ha propuesto reformas para restringir las funciones del tribunal allegado de la organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular su relatoría especial para la libertad de expresión, cuya oficina ha difundido informes críticos sobre el clima de libertad de prensa en ambos países.

Resulta difícil predecir cuánto tiempo más se tolerará a Globovisión. “Los ratings de RCTV subieron cuando se aproximaba su cierre”, señaló Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, una organización que promueve la libertad de expresión y la ética periodística en Venezuela. “Emprenderla con Globovisión puede volverlo más popular”. Globovisión informó que las tarifas de publicidad se han mantenido firmes.

A fines de junio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó un embargo ejecutivo sobre bienes de Globovisión totalizando 24,4 millones de bolívares (5,7 millones de dólares). El asesor jurídico del canal, Ricardo Antela, indicó al CPJ que la decisión estaba dirigida a obligar a Globovisión a pagar la multa por su cobertura sobre la crisis carcelaria. Unos días después, la emisora pagó la multa de 2,16 millones de dólares. Una apelación para anular la multa aún está pendiente en un tribunal administrativo. Si ese fallo fuera favorable, Globovisión solicitará que le reintegren la multa pagada, sostuvo Antela. Mientras tanto, la empresa fue obligada a tomar deuda, indicó el abogado, y el impacto financiero se sentirá en todo el canal.

En tanto, Antela afirmó que la situación es tal que el ente regulador puede apuntar a cualquiera de una serie de procedimientos administrativos abiertos contra Globovisión y clausurar el canal en cuestión de días.

*Monica Campbell es una periodista independiente radicada en San Francisco y fue consultora del CPJ.*



## Los medios estatales se concentran en la oposición, los críticos y limitan el debate público

Muchos medios del estado en América Latina son utilizados para propaganda política, pero el gobierno venezolano ha construido una supremacía mediática sin precedentes que emplea para acatar a los críticos, periodistas independientes y ocultar temas como el crimen y la inflación. **Por Carlos Lauría**



Los medios estatales acusaron a Últimas Noticias de utilizar este crucigrama en un complot para asesinar al hermano de Hugo Chávez. (Reuters/Ultimas Noticias)

Publicado el 29 de agosto de 2012

### NUEVA YORK

Unas pocas respuestas a un crucigrama fueron pronto interpretadas como una supuesta conspiración para asesinar al hermano mayor del Presidente Hugo Chávez Frías. Publicado el 9 de mayo en el diario independiente *Ultimas Noticias* de Caracas, el crucigrama incluía las palabras "asesinar", "ráfagas" y "Adán", el nombre del hermano de Chávez, y llevó a Miguel Pérez Pirela, conductor del programa "Cayendo y Corriendo" en el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV), a señalar que matemáticos y semiólogos lo habían estudiado, captado mensajes codificados y llegado a la conclusión de que se trataba de un intento de magnicidio.

Un día después del programa, integrantes del organismo nacional de inteligencia (SEBIN) visitaron las oficinas del diario para buscar información sobre el autor del crucigrama, indicó *Ultimas Noticias*. Neptali Segovia, un profesor de inglés que ha producido las palabras cruzadas para el diario durante más de 15 años, afirmó que la acusación no tenía asidero y se presentó en forma espontánea ante la justicia para ser interrogado por el

servicio de inteligencia. “Acudí porque soy el primer interesado en que todo esto se aclare; no tengo nada que ocultar”, Segovia expresó en *Últimas Noticias*. No se presentaron acusaciones en su contra.

Si bien la teoría conspirativa fue descripta como excesiva incluso para gente del entorno de Chávez, el caso representa un claro ejemplo del ambiente polarizado y peligroso que reina en Venezuela. En este país, los medios del estado son utilizados no sólo para avanzar objetivos políticos sino también como plataformas para fustigar a los críticos, incluyendo periodistas independientes, y evitar un debate sobre temas centrales, según afirman analistas de medios. La violencia endémica, los secuestros, la crisis carcelaria y la inflación figuran entre las mayores preocupaciones de la sociedad venezolana que han permanecido sin la debida cobertura en las semanas previas a la elección presidencial del 7 de octubre.

“Los medios oficiales distraen la atención de problemas sociales como el crimen, la inseguridad y la economía”, afirmó al CPJ Margarita López Maya, historiadora de la Universidad Central de Venezuela. Las desviaciones a veces pueden tornarse desagradables. En marzo, Mario Silva, conductor del programa “La Hojilla” en el canal estatal VTV, acusó a la caricaturista Rayma Suprani del diario *El Universal* de Caracas de “propagar el odio” con sus ilustraciones. Poco después, Suprani comenzó a recibir insultos y amenazas a través de la red social Twitter, según la organización de libertad de expresión Espacio Público.



Chávez en La Hojilla con el presentador, Mario Silva.  
(Reuters/Miraflores Palace)

Venezuela no tiene leyes que obliguen al gobierno a proporcionar información libre de influencias comerciales o políticas. En cambio, el gobierno de Chávez ha invertido fuertemente para erigir un vasto conglomerado de prensa estatal que favorece su agenda política, según muestra la investigación del CPJ. En otros países latinoamericanos, los medios del estado también transmiten mayormente propaganda a expensas de puntos de vista plurales. Pero los analistas sostienen que algunos canales de televisión a nivel regional tienen un enfoque más equilibrado y llevan temas de interés público. Entre ellos figuran Televisión Nacional de Chile, Canal 22: Canal Cultural de México y TV Cultura en Brasil.

Cuando Chávez asumió el poder en 1999, heredó un aparato de medios con fondos limitados que consistía básicamente en dos medios audiovisuales y una agencia de noticias de escaso alcance. Mientras tanto, los medios privados recibían abundante publicidad de la elite empresarial y eran ampliamente distribuidos. Durante el intento fallido de golpe de estado en abril de 2002, las cuatro principales estaciones de televisión apenas cubrieron las manifestaciones a favor de Chávez y en su lugar emitieron dibujos animados y películas, según muestra la investigación del CPJ. Muchos analistas alegaron que ejecutivos de los medios privados operaron en secreto para imponer un vacío informativo, mientras que los ejecutivos reclamaron que no podían

cumplir con su tarea informativa por temor a la violencia por parte de quienes apoyaban a Chávez. Ningún propietario o ejecutivo de medios fue procesado en la justicia por su participación en el golpe, pero Chávez llegó a la conclusión de que sólo podría controlar el flujo informativo a través del desarrollo de los medios en poder del estado.

Y así lo hizo. Desde el 2003, el gobierno ha financiado la puesta en marcha de ViVeTV, una red de televisión cultural y educativa; ANTV, que transmite las sesiones de la Asamblea Nacional en televisión de aire y por cable; radio AN; Ávila TV, un canal regional manejado por la ciudad de Caracas; Alba TV y Alba Ciudad FM; Radio YVKE Mundial; La Radio del Sur; el periódico *Correo del Orinoco*; y el sitio de noticias Aporrea. La Televisión Social de Venezuela, canal que es conocido como Tves, comenzó a transmitir el 28 de mayo de 2007, un día después de que RCTV fuera retirada del aire. Según un informe especial del CPJ publicado en 2007, el gobierno venezolano no realizó una revisión imparcial y transparente del proceso de renovación de la concesión de RCTV en un esfuerzo dirigido a silenciar su cobertura crítica. En 2010, el ente regulador también retiró a RCTV del cable y del satélite por no transmitir los mensajes de Chávez.



Empleados de RCTV en 2010 después de que el canal fuera retirado de la televisión por cable. (AP / Fernando Llano)

La formidable presencia mediática es apoyada por un grupo de medios comunitarios financiados por el estado, agregó López Maya de la Universidad Central. “El equilibrio entre los medios privados y estatales ha cambiado dramáticamente desde el segundo mandato de Chávez”, indicó al CPJ. De hecho, el gobierno utilizó recursos del ente regulador Conatel, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y el servicio de inteligencia para elaborar un mapa de los medios en todo el país

En julio de 2005, el gobierno lanzó su proyecto de medios más ambicioso: Telesur, un canal de noticias las 24 horas que no tiene publicidad comercial y está disponible por señal abierta y por satélite en América Latina, Estados Unidos, Europa Occidental, el norte de África y algunas zonas de Asia y Medio Oriente, según su sitio web. Venezuela es dueña del 51 por ciento del canal; los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Bolivia poseen una participación minoritaria. Carlos Romero, un politólogo de la Universidad Central, afirmó que la audiencia de Telesur es más global que local debido a su programación internacional. “Tiene un alcance limitado entre los sectores populares. Pero tiene tecnología moderna y bolsillos profundos”, indicó Romero.

En su libro *Hegemonía y Control Comunicacional*, Marcelino Bisbal, analista de medios de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, escribió que la plataforma de medios del gobierno venezolano no tenía precedente en la historia del país o en América Latina.

Chávez ha invertido tiempo así como dinero en el espectro radioeléctrico; ha usado el imperio mediático estatal para volverse omnipresente en la vida de los venezolanos. Según Espacio Público, Chávez ha empleado más de 1.600 horas de transmisión desde 1999, con 2334 cadenas obligatorias de radio y televisión que ocupan toda la programación a nivel nacional.

Pero la presencia del mandatario en el aire no significa necesariamente que los venezolanos estén bien informados acerca de Chávez. El presidente anunció personalmente que los médicos le habían extirpado un tumor cancerígeno del tamaño de una bola de beisbol de la pelvis y, en febrero pasado, informó que había tenido una recurrencia de la enfermedad. Chávez, sin embargo, no ha proporcionado detalles y su condición de salud es tratada como secreto de estado. Buena parte de la información sobre su estado de salud se origina en dos fuentes: el médico exiliado José Mariquina, quien vive en Estados Unidos desde 1991, y el periodista venezolano Nelson Bocaranda, quien tiene el sitio web *Runrun.es*. Bocaranda ha efectuado tantos aciertos en predecir los viajes de Chávez a Cuba que algunos lo llaman el “ministro de información no oficial”, según informes de prensa.

A medida que sus apariciones en televisión han disminuido junto al deterioro de su salud, Chávez se ha comunicado vía Twitter y ha emitido comunicados, provocando a sus críticos a quejarse de que el presidente estaba gobernando el país desde afuera a través de la red social.

De hecho, los medios digitales juegan un rol para respaldar la agenda del gobierno y lanzar ataques contra los críticos. La penetración de Internet ha crecido del 3 por ciento en 1999 a 36 por ciento en 2011, según CANTV, la compañía nacional de telefonía. Chávez ha llamado a Twitter un “arma” que puede ser utilizada en beneficio de su revolución. La mayoría de los funcionarios venezolanos usan Twitter y Facebook; el estado controla varios sitios web de noticias y también una serie de blogs.

Periodistas locales y activistas en defensa de la libertad de prensa advierten que los funcionarios utilizan este despliegue de herramientas para denunciar a los periodistas críticos por lo que describen como intentos por desestabilizar el país, privando a los venezolanos de información vital. En mayo, la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, acusó a los medios privados de exacerbar violentos choques en una cárcel de Caracas y anunció que el gobierno había decidido no difundir más información de las estadísticas sobre prisiones a la prensa privada. El descontento en las prisiones y la superpoblación se han convertido en problemas serios para Chávez; la violencia es generalizada y los reclusos con frecuencia se las ingenian para obtener armas y drogas con la ayuda de guardias corruptos. “No es cuestión de ocultar información”, dijo Varela, según la agencia de noticias estatal AVN. “No podemos permitir que los medios privados refuercen la resistencia de los reclusos, sólo quieren atacar al Presidente Chávez”.

*Carlos Lauría es coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).*

## Piratas informáticos pro-gobierno acosan a periodistas venezolanos

El misterioso grupo N33 atacó las cuentas de Internet de periodistas críticos del gobierno de Chávez. Las víctimas son objeto de mensajes falsos, insultos y amenazas intimidantes. **Por John Otis**



Hugo Chávez tiene más de 3 millones de seguidores en Twitter.  
(Reuters/Jorge Silva)

*Publicado el 29 de agosto de 2012*

### CARACAS

El uso de las redes sociales está en aumento en todo el mundo, pero a medida que se amplían las restricciones del gobierno sobre los medios venezolanos tradicionales, periodistas profesionales y reporteros ciudadanos están volcándose en forma creciente a las redes sociales, especialmente a Twitter, para informar y mantenerse informado. Venezuela tiene cerca de dos millones de usuarios de Twitter, cerca del 8 por ciento de la población. Eso le da a Venezuela la mayor penetración de la red social Twitter en la región luego de Uruguay, según la investigación realizada por la empresa local Tendencias Digitales, especializada en análisis de mercados y audiencias digitales.

“El gobierno intenta silenciar las malas noticias y por esa razón las redes sociales están jugando hoy un rol importante”, indicó al CPJ, Luisa Torrealba, coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela. “Son la válvula de escape que permite a la gente saber lo que está pasando”. O como señaló al CPJ el director del diario *El Nacional* de Caracas, Miguel Henríquez Otero: “Con tanta autocensura en Venezuela, Twitter representa libertad de expresión”. Con frecuencia, los venezolanos informan o se enteran sobre

acontecimientos, tales como cortes de energía y derrames de petróleo que el gobierno no está interesado en publicitar, a través de Twitter, mensajes en Facebook y blogs.

Pero el gobierno también está utilizando las redes sociales para promover su agenda y atacar a sus críticos. La cuenta de Twitter del Presidente Chávez ya superó los tres millones de seguidores, mientras que los ministros a menudo anuncian nuevas medidas vía Twitter. Aún más inquietante, las cuentas de Twitter de conocidos periodistas y líderes de opinión fueron víctimas de piratas informáticos, en muchos casos por un misterioso grupo denominado N33, que simpatiza con el gobierno.

En 2011, la organización de derechos humanos local Espacio Público documentó 30 casos de pirateo informático contra periodistas, escritores, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición. La organización registró otros 14 casos en los primeros meses de este año. En algunos casos, funcionarios del gobierno o figuras ligadas a la administración fueron también atacados. La cuenta de correo electrónico del vicepresidente Elías Jaua fue violada el 9 de febrero de 2012 y los piratas informáticos enviaron mensajes falsos desde su cuenta.

En un comunicado difundido el 2 de septiembre de 2011, N33 anunció que había sido constituido para lanzar ciberataques contra críticos “irresponsables e ignorantes” del Presidente Chávez. El grupo ataca las cuentas de Twitter y luego las utiliza para transmitir mensajes favorables al gobierno o para insultar. N33 se hizo responsable de haber hackeado las cuentas de Twitter de Ibéyise Pacheco, una conocida periodista de oposición, y del escritor Leonardo Padrón, entre otros.

Otra de las víctimas fue Nelson Bocaranda, un popular columnista del diario *El Universal* quien tiene unos 70 mil seguidores en Twitter. Según Torrealba, Bocaranda puede haber sido blanco de ataques porque en el contexto de un vacío informativo por parte del gobierno, el columnista fue uno de los primeros periodistas en informar que Chávez estaba enfermo de cáncer.

Luis Carlos Díaz, un periodista y bloguero independiente, afirmó al CPJ que su cuenta de Twitter fue hackeada en varias ocasiones durante el último año. “Los ataques digitales pueden ser feroces”, señaló Díaz, quien además organiza algunos seminarios para enseñar a periodistas como proteger sus cuentas de Internet de piratas informáticos. “Hemos visto declaraciones que indican que los críticos de Chávez... son cucarachas, el enemigo y que deben desaparecer o abandonar el país”.

Los ataques informáticos van más allá de mensajes falsos e insultos. Piratas informáticos que ingresan a Twitter pueden acceder a los perfiles personales, que revelan direcciones reales de las cuentas de correo electrónico así como el contenido de mensajes privados. De esa forma, N33 y otros piratas informáticos pueden obtener acceso a información personal y otros detalles.

“Porque también ingresan en las cuentas de correo electrónico, pueden obtener tus contactos, saber la dirección de tu casa o los números de tus cuentas bancarias”, afirmó Erika Rosales, quien ha documentado los casos de pirateo informático para Espacio Público. “Es una forma de sembrar miedo. Es la manera que tiene el gobierno para decir: ‘No hagan eso porque los castigaremos’. Y si continúan, será aún peor”. Rosales indicó que luego de que sus cuentas de Twitter fueron hackeadas en septiembre de 2011, Padrón y Berenice Gómez, un periodista de Caracas, recibieron llamados amenazantes de gente que se identificó como integrantes de N33.

Díaz cree que N33 obtuvo acceso a cuentas digitales personales a través de la colaboración del principal servidor de Internet CANTV, que es administrado por el gobierno. N33 ha negado cualquier vínculo con el

gobierno. Pero sus acciones son con frecuencia publicitadas en la “La Hojilla”, un programa en la televisión estatal que a menudo fustiga a los críticos del gobierno de Chávez. Ni CANTV ni el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación respondieron a los correos electrónicos y llamadas telefónicas del CPJ para efectuar comentarios.

Otero expresó al CPJ que luego de que la cuenta de Twitter de su esposa fuera hackeada, algunas fuentes conocidas en el gobierno le asistieron para llevar a cabo su propia investigación. Otero afirmó que su información indicaba que los piratas informáticos estaban trabajando en la oficina de Caracas del organismo nacional de inteligencia, conocido como SEBIN. Ni el SEBIN ni el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia respondieron a correos electrónicos y llamadas telefónicas del CPJ para efectuar comentarios.

El pirateo informático es ilegal bajo la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. De ser condenados, los que violen la norma pueden enfrentar duras multas y hasta seis años en prisión. Si bien Gómez, Padrón y otras víctimas de ataques informáticos han denunciado los abusos ante la Fiscalía General de la nación, las investigaciones no han arrojado progresos y no se han producido procesamientos en la justicia, según Mariela Balbi, directora ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad. Gómez y Padrón han confirmado que sus actuaciones en la justicia no han llegado a ningún lado. Estos altos niveles de impunidad, aseguró Rosales de Espacio Público, “hace que la gente tome estas llamadas amenazantes muy seriamente”. Espacio Público ha publicado una guía digital para ayudar a usuarios de Internet a protegerse contra los piratas informáticos.

Carlos Correa, director de Espacio Público, afirmó al CPJ que “el problema acá es que los críticos del gobierno tienen muy poca protección. El sistema de justicia no es considerado independiente y aún no ha respondido con vigor a las demandas de gente que ha sido víctima de hackeos, cuyo sitio Web ha sido atacado, ha sido difamada o atacada en público”.

Julio Rafael Chávez Meléndez, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, señaló al CPJ que las acusaciones sobre piratas informáticos que atacan a voces independientes son exageradas. Le restó importancia a las acusaciones de la oposición e indicó que se trata de “resistencia a la libre circulación de las ideas”. El diputado sostuvo que las autoridades aún tienen que recibir evidencia de que N33 ha atacado algunas cuentas pero indicó que “esos delitos serán procesados en la justicia si existiera evidencia”.

*John Otis, corresponsal en los Andes del programa de las Américas del CPJ, es también corresponsal de la revista Time y de Global Post. Es autor del libro “Law of the Jungle”, publicado en 2010 sobre contratistas militares estadounidenses secuestrados por la guerrilla colombiana, y está radicado en Bogotá, Colombia.*

Comité para la Protección de los Periodistas  
330 Séptima Avenida, Piso 11  
Nueva York, NY, 10001

Web: [www.cpj.org](http://www.cpj.org)  
Twitter: [@cpjamericas](https://twitter.com/cpjamericas)  
Facebook: [@cpjenespanol](https://facebook.com/cpjenespanol)

Correo electrónico: [info@cpj.org](mailto:info@cpj.org)  
Tel: 212-465-1004